

OPINIÓN >

## Los desafíos de seguridad de Bolivia y la respuesta del gobierno de Paz

*Bolivia enfrenta una serie de desafíos de seguridad que se refuerzan mutuamente*

Por: [Evan Ellis](#)

12 Jun, 2026 03:00 a. m. EST



Bolivia's President Rodrigo Paz shakes hands with Ernesto Justiniano after naming him defence minister following the resignation of Defence Minister Marcelo Salinas amid intensifying protests during Paz's administration, as Paz faces calls to resign, in La Paz, Bolivia, June 3, 2026. REUTERS/Claudia Morales

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

El 2 de junio de 2026, el Ministro de Defensa de Bolivia, **Marcelo Salinas**, renunció tras más de un mes de protestas y bloqueos que dejaron a la capital sin alimentos, combustible ni suministros médicos, y perturbaron la vida económica y política en todo el país, amenazando con derrocar al gobierno de Rodrigo Paz. **Las protestas abordaron diversas cuestiones, como la escasez de dólares y otros bienes, la mala calidad de la gasolina adquirida mediante un contrato estatal, que dañó numerosos vehículos, las demandas de aumentos salariales y la derogación de la nueva ley de propiedad, la Ley 147.** Sin embargo, un aspecto singular de la situación boliviana fue que, en el centro de la financiación, la movilización y la duración de las protestas, se encontraban las acciones del expresidente Evo Morales y los productores de cacao de la región del Chapare. Esta región y sus productores de coca constituyen, sin duda, el núcleo de la producción de cocaína en el país, que se exporta a Europa, Oceanía y otros mercados internacionales a través de una red de narcotraficantes, algunos de los cuales utilizan Bolivia como base de operaciones o refugio. Más allá del narcotráfico y otras actividades ilícitas, las protestas en Bolivia han alcanzado un nivel de insurgencia, aunque no se las reconozca comúnmente como tales, en la zona gris. Los actores involucrados cuentan con un buen financiamiento y coordinación, y se dedican a tomar o bloquear objetivos de relevancia militar, como tramos clave de carreteras, con el objetivo de aislar la capital y paralizar la economía. Utilizan armamento altamente letal, como dinamita y, en ocasiones, armas de fuego, llegando incluso a emboscar a la policía y otras fuerzas gubernamentales. Mientras tanto, el gobierno y las fuerzas de seguridad bolivianas tratan a estos actores como civiles, no como combatientes, temiendo una escalada del conflicto o ser encarcelados, como ya ha ocurrido, si sus líderes políticos, militares o policiales actúan con excesiva agresividad.

Bolivia, estratégicamente ubicada en el centro de Sudamérica, enfrenta una serie de desafíos de seguridad que se refuerzan mutuamente, centrados en la producción de cocaína y el narcotráfico, la minería ilegal y la inestabilidad interna provocada por grupos radicalizados. El gobierno de Rodrigo Paz, recientemente inaugurado, trabaja para abordar estos desafíos, en parte mediante una reorientación fundamental de su política exterior para reconstruir la cooperación con Estados Unidos. Sin embargo, también ha constatado que esta reorientación está acelerando la movilización de quienes buscan derrocar a su gobierno.

Del 21 al 31 de mayo de 2026, el autor visitó Bolivia durante la crisis política y de seguridad que atravesaba el país, entrevistando a más de 40 expertos bolivianos sobre los desafíos y la situación que se desarrollaba en el país. **Este trabajo, uno de los tres derivados de esas interacciones y la investigación complementaria, analiza los desafíos de seguridad de la nación y la labor del gobierno de Paz para abordarlos.**

## **Desafíos de seguridad en Bolivia**

**Narcotráfico.** Bolivia es actualmente una zona de origen de la coca, productora de cocaína y país de tránsito de drogas, además de ser un centro de lavado de dinero y refugio para delincuentes internacionales vinculados al narcotráfico. El papel del país en el narcotráfico internacional se expandió significativamente bajo los gobiernos populistas de izquierda del Movimiento al Socialismo (MAS) de **Evo Morales** y su sucesor y posterior oponente, Luis Arce. Este papel se amplió con la expulsión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por parte del gobierno de Morales en 2008, a raíz de las acusaciones de Morales de que la DEA había espiado a sus parejas sentimentales y tomado otras medidas para perjudicar a su gobierno. Según los consultados para este informe, la ausencia de la DEA y la eliminación de los programas estadounidenses asociados para combatir la corrupción dentro de la policía boliviana, incluyendo su fuerza antinarcóticos FELCN, provocaron un aumento de la corrupción y una disminución de la eficacia de dichos organismos. En Bolivia, el cultivo y uso de hojas de coca en cantidades limitadas para fines tradicionales es legal, y la superficie permitida para dicho cultivo fue ampliada por Evo Morales mediante la Ley 906 en marzo de 2017. No obstante, la superficie cultivada en Bolivia por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 34.000 hectáreas, supera significativamente las 24.000 hectáreas permitidas por dicha ley. **La superficie cultivada en 2024 representó una expansión del 10% en tan solo un año con respecto a 2023.** La producción de coca en Bolivia se concentra principalmente en dos regiones: Yungas y Chapare, dentro del departamento de Cochabamba. Según los expertos consultados para este estudio, la coca de los Yungas posee características más adecuadas para masticar y otros usos humanos, mientras que el contenido de alcaloides y otras cualidades de la coca del Chapare están más optimizadas para la producción de cocaína. En consecuencia, el Chapare se ha convertido en el epicentro de la producción de cocaína, así como de su transformación en cocaína en laboratorios clandestinos. Las seis federaciones de cultivadores de coca del Trópico de Chapare, presididas por Evo Morales, se han convertido, sin duda, en el centro neurálgico de la producción de cocaína en Bolivia y sus vínculos con redes criminales transnacionales.

La cocaína y los productos intermedios producidos en el Chapare se distribuyen a mercados principalmente en Europa y Oceanía a través de múltiples rutas, con la ayuda de importantes grupos del crimen organizado transnacional. Entre ellos se encuentran el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), el grupo paraguayo Insfrán, la mafia serbia y diversos grupos colombianos, entre otros, tienen presencia en Bolivia y participan en este narcotráfico.

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

Históricamente, las hojas de coca bolivianas se transformaban en base de coca, un producto intermedio, que luego se transportaba por vía aérea al norte de Argentina para su procesamiento final. Hoy en día, Bolivia produce cocaína mucho más refinada, que se exporta a través de múltiples rutas. Estas incluyen el transporte desde el Chapare hacia el este, a Brasil, o hacia el sureste, a Paraguay, o directamente a Argentina. Si bien parte de esta coca, en particular el “paco” de baja calidad, se consume en la región, la mayor parte se carga en buques mercantes transatlánticos en puertos importantes como Rosario o Buenos Aires, Argentina, o Montevideo, Uruguay. Parte de la cocaína proveniente de Perú también transita por Bolivia siguiendo estas rutas. Además, una porción de la cocaína que sale del Chapare se envía hacia el oeste, al norte de Chile o Perú, con destino final a los mercados de Oceanía o Europa a través de puertos como Iquique o Arica, Chile.

De los dos principales grupos del crimen organizado transnacional brasileño que operan en Bolivia, el PCC se concentra en el contrabando de cocaína en dirección sureste, mientras que la CV tiende a concentrarse en el norte, incluyendo el departamento de **La Paz y Pando** hacia **Brasil**.

En los últimos meses, se ha descubierto a importantes figuras del crimen organizado transnacional operando desde Bolivia. Entre ellas destacan Sebastián Marsett, jefe del Primer Comando de Uruguay (PCU), filial del PCC, y Gerson Palmero, del Primer Comando de la Capital. Ambos fueron detenidos en Santa Cruz. Marsett vivía cómodamente en el exclusivo barrio de Las Palmas, junto a la élite empresarial y política boliviana, y era propietario de un importante equipo de fútbol del departamento.

**Minería ilegal.** Más allá de la **cocaína**, Bolivia cuenta con una importante industria minera ilegal, un subsector del sector minero informal, mal regulado pero muy extendido en el país, que representa más del 80% de la economía boliviana. La importancia económica relativa de esta minería ha aumentado con el precio del oro, que ronda los 4.500 dólares la onza al momento de redactar este informe, lo que hace que la minería ilegal en Bolivia sea más lucrativa que el narcotráfico en muchos casos.

Como reflejo de la magnitud del sector minero informal, Bolivia es actualmente el mayor importador y exportador de mercurio del mundo. El uso de mercurio en la minería informal tiene consecuencias devastadoras para el medio ambiente, incluyendo la contaminación letal del agua, la vegetación y la fauna.

La minería ilegal también se ha utilizado para blanquear dinero procedente del narcotráfico y otras actividades ilícitas, especialmente porque el oro extraído informalmente se suele comprar en efectivo.

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

Al igual que con la cocaína, existe una sinergia entre la minería ilegal y **Bolivia y Perú**. Cuando Perú ha intensificado la represión contra la minería ilegal o ha aumentado los controles sobre el origen de su oro, parte de este oro se introduce de contrabando en Bolivia, donde se considera más fácil obtener documentos falsificados que demuestren que el oro proviene de minas bolivianas. Por el contrario, cuando el banco central boliviano ha comprado oro del sector informal para incrementar sus reservas a precios de mercado, los bolivianos lo han introducido de contrabando en Perú para venderlo a precios más altos en la economía ilícita.

Al igual que en Perú, elementos del crimen organizado chino también tienen presencia en el sector aurífero informal e ilegal de Bolivia como compradores del producto, así como proveedores de equipos de dragado y materiales como el mercurio, entre otras funciones.



Manifestantes de sindicatos mineros portan antorchas frente a la policía durante protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz en medio de una crisis económica y de combustible, en La Paz, Bolivia, 14 de mayo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

**Insurgencia disfrazada de protesta.** Más allá del crimen organizado, Bolivia ejemplifica la difuminación extrema de los límites entre la protesta política y social legítima y la insurgencia. Las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Chapare, mencionadas anteriormente, han desempeñado un papel fundamental, junto con el Comité de

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

Trabajadores Bolivianos (COB) y la federación de trabajadores Tupak Katari, en las protestas contra los gobiernos bolivianos de derecha, en defensa de gobiernos o políticas que afecten su producción de coca y su transformación de facto en cocaína. El papel de los cocaleros en las protestas bolivianas de mayo de 2026 se basa, en parte, en la orden de arresto emitida por el gobierno contra Evo Morales por no presentarse ante el tribunal para enfrentar cargos de trata sexual de menores, relacionados en parte con la hija que tuvo fuera del matrimonio con Gabriela Zapata, quien entonces tenía 14 años. Los enormes ingresos generados por la producción de cocaína en el Chapare proporcionan, sin duda, los recursos utilizados para transportar a los manifestantes a lugares específicos, pagar su comida, estipendios en efectivo y otros beneficios. Cabe destacar que el uso de dinamita en la economía minera ha hecho que los explosivos sean omnipresentes en las protestas en Bolivia, incluso a un nivel que representa un peligro cuando se lanzan contra vehículos blindados de la policía y el ejército.

Según las fuentes consultadas para este trabajo, a lo largo de los años, los aliados ideológicos de los gobiernos populistas de izquierda de Evo Morales han facilitado el reclutamiento de miembros de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (**FARC**), y, según informes, también el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (**ELN**), **Sendero Luminoso** de Perú y grupos cubanos, entre otros, para brindarles entrenamiento militar y de otro tipo.

En las recientes protestas de mayo de 2026, al igual que en ocasiones anteriores, la combinación de recursos, capacidad letal y entrenamiento militar a disposición de los cocaleros y otros manifestantes ha llevado a que sus acciones se asemejen a una insurgencia de baja intensidad. Durante los esfuerzos de mayo de 2026 para desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz, por ejemplo, los manifestantes bloquearon deliberadamente rutas estratégicas que controlaban el acceso de alimentos, gasolina, suministros médicos y otros materiales necesarios hacia y desde la capital, La Paz. Incluso bloquearon las escasas carreteras que conectan la ciudad con el Aeropuerto Internacional y otras zonas de El Alto, la ciudad ubicada en la cima de la meseta conectada a La Paz, e intentaron paralizar los teleféricos que sorteaban los bloqueos viales que conectaban ambas ciudades. Cuando las fuerzas gubernamentales intentaron avanzar en un convoy blindado para desbloquear una de las rutas y crear un corredor humanitario, manifestantes armados con dinamita y armas emboscaron el convoy, obligándolo a retroceder. En el proceso, el Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zambrano, se separó del convoy y, según los informes, su vida corrió peligro mientras era perseguido por los manifestantes que buscaban asesinarlo, tal como años antes habían emboscar un convoy y asesinado a un ministro del gobierno en la misma zona.

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

En otra parte del país, cuando la policía boliviana intentó bloquear con discos una carretera crucial que conecta Santa Cruz con Cochabamba, **fue emboscada por manifestantes que lanzaron dinamita desde posiciones elevadas estratégicamente ubicadas.**

En el departamento de Santa Cruz, los manifestantes bloquearon una carretera estratégica en San Julián y movilizaron a miles de refuerzos al enterarse de que miembros de la Liga Juvenil de Santa Cruz planeaban marchar hacia el lugar para levantar los bloqueos. Según los informes, los manifestantes de San Julián habían apostado francotiradores en la carretera anticipándose a la llegada de la UJC, una situación que habría desembocado en una masacre si el comité cívico de Santa Cruz no hubiera cancelado la marcha prevista.

En el análisis tradicional de contrainsurgencia, el intento de un grupo organizado y bien armado de desplegarse militarmente con el objetivo de aislar la capital y derrocar al gobierno se consideraría una insurrección, sujeta a una respuesta armada, aunque proporcional, por parte del gobierno, conforme a las leyes de la guerra en Bolivia. Sin embargo, la tradición de este tipo de protestas, incluyendo el uso de dinamita y algunas armas, sumada a la debilidad y, en ocasiones, la falta de fiabilidad de las fuerzas de seguridad, ha llevado al gobierno a tratar repetidamente estas actividades como delictivas, no como un combate.

### **Respuesta del Gobierno de Bolivia**



Fuerzas de seguridad custodian una carretera tras su reapertura después de las protestas que exigían la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en Carreras, departamento de La Paz, Bolivia, el 5 de junio de 2026. La policía y el ejército bolivianos despejaron una carretera clave el 5 de junio que manifestantes antigubernamentales habían bloqueado con escombros para interrumpir el suministro de alimentos y otros insumos a La Paz. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP)

Dentro del gobierno boliviano, sus fuerzas armadas y policía, existen muchos profesionales competentes que buscan actuar con honor para cumplir con sus deberes, proteger la seguridad del país y combatir a las organizaciones criminales y otras amenazas. Sin embargo, gravemente perjudicado por dos décadas de gobierno del MAS, estrechamente vinculado a los productores de cocaína del Chapare y a intereses criminales en el sector minero informal, y con una financiación insuficiente persistente, el gobierno boliviano y sus fuerzas de seguridad se ven gravemente afectados por la corrupción y la degradación de sus capacidades.

**La Policía y la FELCN.** Dentro de la policía nacional boliviana, especialmente tras la expulsión de la DEA y la finalización de los programas estadounidenses de capacitación, transparencia y fortalecimiento institucional, los controles contra la corrupción han sido prácticamente inexistentes en un país inundado de actividad y dinero ilícitos. Según los

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

encuestados para este trabajo, la corrupción dentro de la policía boliviana es generalizada. De hecho, a modo de ejemplo, en 2024, Maximiliano Dávila, el zar antidrogas de la era de Evo Morales en Bolivia, fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico, al igual que la anterior directora de la FELCN, Renée Sanabria, en 2011.

Como primer paso para afrontar la situación, el gobierno de Paz reintrodujo a la DEA en el país en 2026, aunque con un número limitado de miembros, operando como representante en una oficina en La Paz.

En la policía en general, además de la corrupción, existe una importante falta de equipamiento necesario tanto para combatir el crimen como para hacer frente a las protestas. Esto incluye una grave escasez de material básico para el control de multitudes, como el gas lacrimógeno, que en respuestas gubernamentales anteriores, el gobierno incluso ha importado de Argentina. La policía boliviana se ha visto obligada durante mucho tiempo a comprar sus propios uniformes y gran parte de su equipamiento. En medio de una grave crisis fiscal, aumentar los recursos policiales aún no ha sido una opción para el gobierno de Paz.

**El Ejército boliviano.** Las capacidades del ejército boliviano, al igual que las de la policía, se han visto mermadas por la corrupción y el abandono. Durante la era de Evo Morales, el gobierno buscó reestructurar fundamentalmente las fuerzas armadas y transformar su orientación. Entre sus esfuerzos se incluyó la incorporación de cubanos, principalmente al servicio de inteligencia militar boliviano G2, que no solo apoya al ejército, sino que, ante la ausencia de un servicio de inteligencia civil, también integra la inteligencia civil, policial y militar. El gobierno de Morales también utilizó a los cubanos para ayudar a lanzar su “Escuela Antiimperialista” para el adoctrinamiento militar, posteriormente desmantelada por el gobierno de Jeanine Áñez.

El gobierno de Morales impulsó aún más la igualdad entre la tropa y los oficiales, tanto en la policía como en las fuerzas armadas, y abrió el cuerpo de oficiales bolivianos a personal que anteriormente carecía del título universitario requerido, e incluso, en algunos casos, de alfabetización básica. Cabe destacar que un número significativo de estos nuevos reclutas, incorporados a través del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), provenían de Chapare, la principal región productora de cocal y bastión de Evo Morales. Hoy en día, muchos de ellos ocupan, según informes, puestos de liderazgo, con rangos que van desde mayor hasta coronel. Como resultado, el gobierno del presidente Paz se ha mostrado muy reacio a desplegar a las fuerzas armadas o a la policía para enfrentar a los manifestantes, no solo por la falta de equipo y entrenamiento adecuados, sino también por la disparidad de lealtades dentro de las fuerzas armadas y el riesgo de que estas decidieran unirse a los manifestantes, negarse a luchar o incluso participar en actos de

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

sabotaje que incitaran deliberadamente a la violencia para desestabilizar la situación y acelerar la caída del gobierno. Del escaso equipo nuevo adquirido por las fuerzas armadas, prácticamente todo ha sido de baja calidad, comprado o donado por la República Popular China (RPC). Esto incluye 6 cazas interceptores K-8, 6 helicópteros Z-9, un número limitado de camiones militares Dong Feng, 31 vehículos blindados y un pequeño número de patrulleras.

De los seis **K-8**, dos se estrellaron y, según se informa, solo uno sigue operativo, debido a una combinación de mantenimiento deficiente o postergado y la dificultad para obtener repuestos. Por razones similares, de los seis helicópteros Z-9, solo uno sigue operativo, pero, según se informa, nadie quiere volarlo porque no ha recibido el mantenimiento adecuado.

Aunque Bolivia intentó mantener una flota antigua de helicópteros UH-1H estadounidenses, el dinero que el Departamento de Estado de EEUU dejó para su mantenimiento fue, según se informa, desviado a otros fines, y ninguno sigue en servicio. La situación es similar con el pequeño número de helicópteros Super Puma de Bolivia. De los vehículos que posee el Ejército boliviano, la mayoría fueron adquiridos del vecino Brasil, incluyendo sus principales camiones de transporte de 2,5 toneladas, fabricados por la empresa INGESSA. Algunos vehículos terrestres de la flota boliviana tienen casi 70 años. De los vehículos anfibios URUTU, ya obsoletos y adquiridos de Brasil, solo seis siguen operativos. También cuentan con un número limitado de vehículos Cascavel, también obsoletos y procedentes de Brasil, de los cuales, según se informa, siete están en funcionamiento. Estos vehículos que aún funcionan lo hacen gracias a que han sido modernizados y mantenidos de forma deficiente.

Bolivia también ha adquirido algunos camiones Nissan “Condor” fabricados en **Argentina**, pero estos son de uso civil, no militar.

De la pequeña cantidad de vehículos terrestres adquiridos recientemente de **China**, como se mencionó anteriormente, el Ejército boliviano generalmente no los utiliza debido a sus altos costos operativos, incluyendo un rendimiento de combustible de aproximadamente un kilómetro por litro en un momento en que la gasolina es cada vez más cara y los recursos son limitados. Para detectar vuelos de narcotraficantes, en 2016 el gobierno de Morales adquirió nueve radares de la empresa francesa Thales. Sin embargo, durante su mandato, estos nunca se pusieron en funcionamiento. El gobierno actual, en cambio, ha logrado que aproximadamente la mitad funcione.

Ante estas dificultades, el gobierno de Paz ha retomado el diálogo con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad militar. Según informes, está considerando

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

nuevamente enviar estudiantes bolivianos a instituciones militares estadounidenses como el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC), aunque se desconoce el número de estudiantes que podrán recibir financiación en la actual situación fiscal.

Más allá de la cooperación con Estados Unidos, el camino que seguirá el gobierno de Paz con los narcotraficantes, mineros ilegales e insurgentes de facto que buscan derrocarlo es incierto. Según los entrevistados para este trabajo, el presidente ha reconocido en cierta medida la importancia de abordar el tema de Evo Morales, actualmente prófugo de la justicia boliviana, y otros líderes cocaleros en Chapare, como factores clave para la persistencia, el nivel de violencia y la desestabilización de las protestas. Sin embargo, no está claro si el presidente se arriesgaría a una acción militar o policial que pudiera precipitar la caída de su gobierno, como ocurrió en 2003 con la pérdida de vidas que causó el enfrentamiento con las fuerzas armadas, como sucedió en 2019, o si elementos militares y policiales se unieran a las protestas. Por otro lado, si el presidente intenta negociar con los manifestantes, con la esperanza de dividirlos y sobornarlos, probablemente agravaría los problemas fiscales de Bolivia, lo que en última instancia dificultaría la provisión de los recursos necesarios para las Fuerzas Armadas y la Policía. Además, si el presidente Paz incorpora a algunos grupos radicales de izquierda a su gabinete como ministros, esto podría obstaculizar su acercamiento a Estados Unidos y la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico que de ello se derivaría.

## **Conclusión**

Bolivia, nación de importancia estratégica, se encuentra en un momento crítico en el que el gobierno de Rodrigo Paz está dispuesto a reconstruir las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad y otros ámbitos, como lo demuestra su participación en la Coalición Americana contra los Cártels (A3C) y en la Operación Escudo de las Américas en marzo de 2026.

Si bien la cocaína boliviana, el oro ilícito y los refugiados no se dirigen directamente a Estados Unidos, el papel previamente señalado de Bolivia como centro neurálgico para importantes organizaciones criminales internacionales, incluidas aquellas como el PCC y el CV, designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas, subraya la importancia para Estados Unidos del éxito de Bolivia en su lucha contra el narcotráfico, otros delitos transnacionales del crimen organizado y la insurgencia disfrazada de protesta social.

<https://www.infobae.com/america/opinion/2026/06/12/los-desafios-de-seguridad-de-bolivia-y-la-respuesta-del-gobierno-de-paz/>

La crisis fiscal de Bolivia y la profunda corrupción que impregna sus instituciones hacen prácticamente imposible que el gobierno de Paz tenga éxito en esta lucha por sí solo. De hecho, incluso la capacidad básica para enfrentar a quienes participan en un “asedio” militar a La Paz se ve debilitada por la falta de confianza en los recursos y la lealtad de las fuerzas de seguridad bolivianas.

Recíprocamente, la caída de un gobierno boliviano pro estadounidense, largamente esperado, comprometido con la lucha contra el crimen organizado y los grupos terroristas, y que se resiste a cooperar con rivales estadounidenses extra hemisféricos, sería desastrosa no solo para Bolivia, sino también para sus vecinos, ya afectados por la economía criminal boliviana alimentada por la cocaína y el oro, y por grupos indígenas radicalizados.

Desde la perspectiva de Washington D.C., el papel de Cuba en el apoyo al gobierno anterior de Evo Morales, y el riesgo de que regresen al poder con él, contradiría directamente el progreso que la actual administración estadounidense ha logrado contra el gobierno narco de Nicolás Maduro en Venezuela, y que busca lograr contra el gobierno comunista en Cuba. Aunque Bolivia se encuentra geográficamente algo alejada de Estados Unidos, es fundamental para la dinámica de la región, a la que Estados Unidos ha dado prioridad en sus estrategias de Seguridad Nacional y Defensa Nacional, por considerarla crucial para la seguridad de su territorio. Lo que sucede en Bolivia tiene implicaciones para Estados Unidos.